

¿Se puede desactivar la violencia?

Can violence be disabled?

Recibido:
Abril 26 de 2013
Aprobado:
Agosto 17 de 2013

Ana Cristina Aristizábal Uribe
*Comunicadora social Periodista. Docente de la Facultad
de Comunicación Social de la UPB.*

Resumen

Este artículo plantea cómo la violencia que históricamente se ha presentado en Colombia, obedece a unos factores que, si pueden desactivarse, contribuirán a detener la espiral que la evolución de este fenómeno ha creado, dedicara atención prioritaria al papel que, al respecto, han jugado las ideologías políticas, la permisividad frente a la cultura de la ilegalidad, y la exclusión social.

Palabras Clave:

Violencia, cultura dela ilegalidad y exclusión social.

Abstract

This article explains how violence which has historically been active in Colombia due to some factors that can be disabled will help stop the spiral which has been created by the evolution of this phenomenon, and it will devote special attention to the role that political ideologies have played in this issue, against the culture of illegality permissiveness, and social exclusion.

Keywords:

Violence, Illegality culture, and social exclusion.

Dice Marco Palacios (Palacios, 2012, pág. 49) que, por su larga duración, se tiene la tentación de presentar al conflicto armado colombiano como un fenómeno “natural” y “consustancial” a nuestra historia, geografía y psiquis nacional. Y en otros contextos se ha creído que la violencia pareciera una característica propia del ser humano que se arroja bajo el gentilicio de colombiano.

Pero trataremos de demostrar en este artículo, que la violencia que nos envuelve desde el nacimiento de la República tiene unas causas humanas que, si logramos intervenir y, ojalá, desactivar, se podría detener esa espiral que ha dejado una cifra de muertos y de víctimas imposible de establecer; desde cuando comenzó la llamada “violencia” en la década de los años 50 del siglo XX.

El énfasis en este artículo, es poner el reflector sobre algunos de los factores generadores de violencia, con la genuina creencia de que, una vez detectados y esclarecidos, la sociedad colombiana puede intervenirlos y desactivarlos para impedir que continúen generando violencia. Como sería bastante ambicioso tratar de hablar sobre los factores que causan la violencia en Colombia, en este artículo solo se mencionarán algunos de ellos: para la violencia de los primeros 60 años del siglo XX, las ideologías políticas; y para la violencia producida por el narcotráfico: la cultura de la ilegalidad (no sancionada socialmente), la exclusión social y la falta de oportunidades.

El artículo tendrá dos momentos: el de la violencia política en Colombia, y el de la violencia generada por el narcotráfico, con énfasis en Medellín.

Hablar de este tema con abordaje académico, es una tarea de gran envergadura; sin embargo, las investigaciones de Marco Palacios; monseñor Germán Guzmán, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña; Gustavo Duncan y Gerard Martin, darán ciertas pistas para entender los factores ya enunciados que, si son desactivados, podrían generar ambientes menos violentos en Colombia.

Un mal comienzo

El detonante de la violencia en los primeros 50 años del siglo XX, es el encarnizado enfrentamiento entre liberales y conservadores por el poder. Ambos grupos están conformados por una élite política y económica con

orígenes en la época colonial. El profesor Marco Palacios Rozo (Palacios, 2012, pág. 38) recuerda que ya en el famoso “Carnero” de Juan Rodríguez Freyle se cuenta cómo un grupo de oligarcas fascinados por el poder, pero empobrecidos por el fracaso de nunca encontrar El Dorado, se inventaron la forma de sustraerse del gobierno del rey para ir fraguando una sociedad de parásitos que vivían, materialmente, de la explotación de los indígenas y de los esclavos negros traídos del África, a los que habían dominado cultural y políticamente.

Desde entonces, se ha presentado una línea cultural de simulación política e imágenes de poder que aún podrían perdurar en algunas partes. Las familias oligarcas son las que mandan, no el rey, pero mandan haciendo creer que es el rey el que manda. Por eso, a medida que avanza la “civilización”, en la Nueva Granada la estructura más decisiva es la patriarcal. En la unión de estas familias y su espíritu colaborativo fue que se hizo costumbre aquello de “obedezco pero no cumplo”, imagen absoluta de la desigualdad entre los vasallos (ya que algunos se hacían los que obedecían, pero no obedecían) generando la división tácita entre ciertas “repúblicas de españoles” y “repúblicas de indios”. (Palacios, 2012, pág. 38).

La tesis de Palacio Rozo es que, leyendo a “El Carnero” se puede colegir que la monarquía española hizo tantas concesiones a las familias notables de criollos, que dejó en vilo el contrato social para el afianzamiento de un Estado moderno. (Palacios, 2012, pág. 38).

Esos “notables criollos”, como veremos más adelante, se aglutinaron en los partidos Liberal y Conservador, en una lucha sectaria por el poder, que tras desembocar en la violencia del siglo XX, *“se hicieron a un lado estas clases que se precian de legalistas y civilistas, se refugiaron en la capital y dejaron el manejo político a las redes de gamonales municipales y provinciales para que esas ‘bajas pasiones sectarias’ quedaran confinadas a las capas populares”*. (Palacios, 2012, pág. 50).

Comienza la violencia política

Una génesis clara de la violencia colombiana en los primeros 50 años del siglo XX tuvo origen político. Fue una violencia sectaria, fanática, ideológica, que llevó a unos y a otros a matar por un color: rojo o azul. La Guerra de los Mil

Días, con la que se recibió ese siglo no fue otra cosa que una guerra entre conservadores y liberales, que, después de casi tres años de sangrar al país, ganaron los conservadores. Esa victoria, que nunca pudo sembrar la paz en los colombianos pero sí una discordia que más tarde se extendería por casi 60 años, duró hasta los años 30 cuando ganó las elecciones presidenciales el liberal Enrique Olaya Herrera, y entonces, se “*desató la persecución de los liberales triunfantes contra los conservadores vencidos, especialmente en los departamentos de Boyacá y Santanderes*”, como explicó el expresidente interino de Colombia Roberto Urdaneta Arbeláez. (Guzmán, Fals, & Umaña, 2010, pág. 39).

En 1946 el “turno” del poder fue nuevamente para los conservadores. En ese año asumió la presidencia Mariano Ospina Pérez y comenzó a cargarse el ambiente de odio contra los partidarios del grupo del presidente y contra el nuevo gobierno. “*Los días discurren bajo una gran tensión política y social con marcada tendencia a la anarquía, reflejada en una creciente ola de huelgas y paros solidarios que se extienden por todo el país desde el mes de septiembre de 1946*” (Guzmán, Fals, & Umaña, 2010, pág. 43). Esa ola de huelgas se agudiza hacia 1947 cuando, con el fin de derrocar al gobierno conservador de Ospina Pérez, estalla un paro general de transportadores. Los acontecimientos violentos son de carácter político. Es en ese contexto de odios y persecuciones, cuando en 1947 un jefe político organiza los primeros grupos de hombres armados llamados “pájaros”: “*En el occidente de Caldas se decomisa gran cantidad de armas y aparecen en Santuario y Belalcázar los primeros grupos de violentos, que posteriormente se llamarían ‘pájaros’, organizados por un alto y prestigioso jefe político*”. (Guzmán, Fals, & Umaña, 2010, pág. 47).

De esta forma no se puede ver como algo extraño o salido de la nada, el tristemente célebre “Bogotazo” que partió en dos la historia de la Colombia moderna. Ese año 1948 llegó cargado con la tensión social suficiente para que las fuerzas en pugna demostraran toda su furia y dejaran el país sumido en el caos durante los seis años posteriores, hasta la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla y el ulterior inicio del Frente Nacional.

Aquí cabe hacer dos paréntesis. Uno tiene que ver con la injerencia revolucionaria internacional que en Colombia pretendía tomarse el poder gubernamental; y el otro, con la participación de los medios de comunicación

masivos y el lenguaje usado en dicha confrontación, que sirvió para azuzar los ánimos y empeorar los acontecimientos.

El político conservador Rafael Azula Barrera, quien fuera secretario de Ospina Pérez, escribe, en 1956, que la huelga general de 1947 tenía el sello de un movimiento subversivo de inspiración internacional que, junto con elementos de la organización sindical de Colombia y con el apoyo de algunos liberales, pretendía desestabilizar completamente al país.

En aquella ocasión me correspondió conocer informes alarmantes. Muchos de ellos denunciaban el propósito de llegar hasta el asesinato de líderes políticos indeterminados, la destrucción de puentes y carreteras; el incendio de ciudades, el asalto de las oficinas públicas, particularmente aquellas en que funcionaban los servicios de comunicaciones; el ataque a los cuarteles de Policía, el concurso de unidades desleales de la institución; el control de las radiodifusoras, para propagarse desde allí noticias extravagantes que contribuyeran a sembrar el desconcierto colectivo, quebrantando la moral pública (Guzmán, Fals, & Umaña, 2010, pág. 45).

También Guzmán Campos, Fals Borda y Umaña Luna aseguran que en esa época una importante ayuda comunista internacional llegaba a Colombia, con el fin de derrocar el gobierno de turno y tomarse el poder a cualquier precio.

Un observador foráneo, Vernon Fluharty, sostiene que del extranjero, especialmente de Venezuela, llegaban a los comunistas colombianos recursos de todas clases, inclusive armas y municiones. Entraban, así mismo, agitadores de diversas nacionalidades: entre otros, que se sepa seguramente, Gustavo Machado, venezolano que actuaba como intermediario con la CTC; Salvador Ocampo, senador comunista chileno; Luis Fernández, comunista español; Eugenio Kerbaul, francés; Milorad Pesic, miembro del partido comunista yugoslavo; Frances McKinnon, ciudadana americana de origen francés. Se ponían inmediatamente en contacto con los comunistas colombianos, y todos juntos entraban a promover la agitación y abrir el camino de la revolución (Guzmán, Fals, & Umaña, 2010, pág. 46).

En ese fatal año de 1948, otro elemento interviene: el lenguaje usado por la prensa liberal y conservadora. Guzmán, Fals y Umaña citan al famoso

periodista “Calibán” de *El Tiempo* quien “con cabeza fría escribe en la ‘Danza de las Horas’ que la causa de la violencia ‘es necesario buscarla también en las campañas de la prensa que la estimulan sosteniendo todos los días que los conservadores son un hato de asesinos, o que los liberales son una tribu de bandoleros. Para desarmar los espíritus es obvio comenzar por descargar de explosivos las palabras”. (Guzmán, Fals, & Umaña, 2010, pág. 50).

Después de cerrado este paréntesis, es necesario puntualizar que en la violencia política que se está describiendo, hay un elemento importante que se erigiría como generador y causa de propagación de más violencia en aquella época: la participación de la policía oficial del gobierno conservador para atacar a sus adversarios políticos. Cuando el sujeto que representa el orden y la soberanía usa su investidura para cometer atropellos e injusticias, la figura de autoridad pierde credibilidad y hace que el grupo en desventaja invente mecanismos de defensa. El argot popular los llamó “chulavitas”, pues fue en la vereda Chulavita del municipio de Boavita, en Boyacá, donde, por primera vez, gamonales de la región reclutaron para sus intereses violentos a elementos de la policía oficial.

La participación de la policía a favor de los intereses de los conservadores, y la reacción de los liberales creando grupos armados para su defensa, queda claramente establecida por Guzmán, Fals y Umaña cuando enumeran los tres factores determinantes en la equivocada estrategia política que trazaron los partidos tradicionales para la campaña electoral de 1949: “a) *Estabilización del grupo conservador en el poder, con exclusión violenta del contendor liberal.* b) *Utilización de la Policía en una campaña de persecución innegablemente pensada y planeada desde altas esferas de Gobierno.* c) *Declaración de la resistencia civil por el Partido Liberal perseguido, la que pronto se tradujo en acción de grupos armados*” (Guzmán, Fals, & Umaña, 2010, pág. 57).

Esa ola de violencia, que pervivió prácticamente durante esos primeros 50 años del siglo XX, y que tuvo su momento culminante entre 1946 y 1954, tuvo una causa clara: los odios políticos y sectarios llevaron el fanatismo ideológico a su culmen y cegaron un número altísimo pero indeterminado de vidas. Esa guerra fue alimentada por los líderes políticos y estimulada por una prensa que no supo guardar el equilibrio.

Las nefastas consecuencias

Pero hay más. Y de lo que se puede colegir de este período serán unas consecuencias tan nefastas que, sin temor, se puede decir que ellas se convertirán en las causas del siguiente período de violencia colombiana: la violencia mafiosa que degenerará en la violencia generalizada del paramilitarismo y las posteriores bandas criminales, que en Colombia se han llamado “Bacrim”.

La gran consecuencia de ese primer período de violencia es descrita, sesudamente, por Guzmán, Fals y Umaña en el capítulo X de su obra. Por efectos de espacio, aquí solo se mencionará de corrido: *“fue la quiebra de las instituciones fundamentales: las instituciones políticas (partidos tradicionales) y gubernamentales (Concejos, Asambleas, Senado y Cámara; Policía y Ejército; y el poder judicial), religiosas, económicas y familiares”* (Guzmán, Fals, & Umaña, 2010, págs. 259-307).

Agrega Marco Palacios que *“en esa época, cuando fueron más delgadas y contingentes las líneas divisorias de lo legal y lo ilegal, de lo pacífico y lo violento, de la justicia del Estado o la de propia mano; cuando campeó la incertidumbre de la represión oficial o de la respuesta armada indiscriminada, se socializaron políticamente millones de niños colombianos...”* (Palacios, 2012, pág. 46). La acotación obligada aquí, es: millones de niños colombianos, los adultos de hoy, se socializaron en un país sin líneas claras entre lo legal y lo ilegal; lo pacífico y lo violento; la justicia estatal o la propia; la represión oficial y la respuesta civil armada.

Pero no fue solo el tiempo cuando quizá más se enquistó en la cultura nacional la violencia, pues el mensaje parecía ser que la “única solución” a los conflictos era la vía violenta; sino que fue, además, el tiempo en que la Colombia ilegal empezó a aflorar con más fuerza, con un característica: era una ilegalidad promovida por aquellas capas sociales que, supuestamente, por su misma posición, no tendrían por qué actuar de formas fraudulentas. Estas elites sociales aprovecharon el ruido que hacía la violencia, para hacer que sus fechorías pasaran desapercibidas. Así lo describe el profesor Palacios Rozo: *“La violencia fue una cortina que cubrió el desacato generalizado a la ley por parte de las élites empresariales y plutocráticas, esto es, sus prácticas de evasión fiscal, contrabando, tráfico de licencias de importación, sobrefacturación,*

operación en mercados negros y paralelos de moneda extranjera. La bonanza cafetera de esa época (1945-1954), que se caracterizó por fuertes fluctuaciones de precios de tipo especulativo, volvió rutinarias tales prácticas” (Palacios, 2012, pág. 46).

La solución a la violencia partidista y sectaria, y después del golpe militar de 1953 de Rojas Pinilla, fue el Frente Nacional. Sin embargo, esta “solución” no permitió que otros partidos diferentes a los tradicionales Conservador y Liberal, pudieran participar en las elecciones, limitando la participación a una franja muy cerrada de la sociedad. Además, el Frente Nacional no se preocupó por aliviar la miseria generada por todos los años anteriores de violencia.

El Frente Nacional duró desde 1958 (Pinilla cae en el 57) hasta 1974. Los partidos en contienda convinieron en turnarse la presidencia, para evitar los enfrentamientos armados y violentos que se suscitaban cuando alguno de los dos ganaba las elecciones. En su momento se logró así acallar la violencia tal y como se venía ejerciendo; sin embargo, el profesor Palacios muestra las consecuencias del invento frentenacionalista, y advierte sobre la discriminación política que limitó la participación a los grupos tradicionales y el modelo de economía que desatendió las verdaderas necesidades económicas dejadas por la violencia en los sectores rurales y urbanos más pobres. *“No hay que ser perspicaz para advertir cuán delgada es la tela que separa la discriminación política de la exclusión social. Si las reglas políticas del Frente Nacional limitaron la primera, su modelo de economía política desatendió la segunda, todo arropado por un civilismo de vieja data”* (Palacios, 2012, pág. 52).

Esa contienda en los campos colombianos generó una migración masiva hacia las ciudades, ocasionando que muchas de estas crecieran desordenadamente, al no tener planes de contingencia listos para recibir al altísimo número de personas que llegaba casi de manera precipitada.

La violencia del narcotráfico

¿Por qué el narcotráfico tuvo fuerza de tsunami en Colombia? Para comenzar, cabe preguntarse cómo una actividad criminal tiene tanta aceptación social como para permear casi todas las capas sociales sin recibir un rechazo tan

decidido que le ayude a la justicia a detenerla; por el contrario, no solo la acción de la justicia sufre un importante debilitamiento, sino que son tan numerosos los miembros de la sociedad que se involucran con dicha actividad, que de alguna manera, termina por ser aceptada socialmente.

En la línea de pensamiento que se desarrollará a continuación, aparece una triada: una subcultura de la ilegalidad, fortalecida en el periodo anterior de la violencia; una subcultura de la permisividad, que no sanciona socialmente a quien la practica; y la existencia de un numeroso grupo de personas que padecen la exclusión social, al no encontrar formas de reconocimiento, aceptación ni ascenso social.

Para empezar, se podría hablar de aquella subcultura de la Colombia ilegal que ha afectado buena parte de la sociedad. No se sabrá si alguna conexión existe entre aquellas élites que, como ya lo mostró el profesor Palacios, aprovecharon la época de la violencia para ejercer sus actividades comerciales y transacciones, oscilando entre la delgada línea de lo legal y lo ilegal, y aquellas clases sociales que simplemente aprendieron de ellos, que había otras formas de sobrevivir en un país con, cada vez, menos oportunidades en educación, trabajo, aceptación social.

Por eso, no es en vano que el mismo Marco Palacios (Palacios, 2012, pág. 57) se refiera a la división de Colombia en “tres países”: uno, las “islas de legitimidad” compuesto por las áreas metropolitanas y principales ciudades. Dos, nueve zonas de colonización reciente a las que llama “territorios de poderes fácticos” (aquí están: Urabá-Darién; Caribe-Sincé-San Jorge; Serranía del Perijá; Magdalena Medio; zonas del Pacífico en Nariño y Chocó; Saravena-Arauca; piedemonte andino de la Orinoquia; Ariari-Meta y Caquetá-Putumayo). Y tres, el resto de Colombia “un país en el medio”.

El asunto de la ilegalidad es un tema complejo en Colombia. Para empezar, habría que decir que, en el país, ciertos contextos culturales permitieron con más facilidad el inicio de actividades ilegales: *“Las condiciones del contexto de ciertas sociedades del país, permitieron que la oportunidad ofrecida por un mercado ilícito se materializara en la formación de complejas empresas criminales capaces de producir y comercializar cocaína a escala mundial”* (Duncan, 2011, pág. 159).

Detrás de todo esto hay varios factores, pero para la intención de este artículo, se destacará la siguiente características del contexto social de Antioquia que permitió tal difusión del narcotráfico: *“La permisividad social frente a transgresiones a la ley”* (Duncan, 2011, pág. 182). Uno de los principales problemas de la cultura antioqueña, aunque el resto del país no es la excepción, es la falta de sanción social ante aquellos que cometen actos ilícitos e ilegales; es muy común aceptar popularmente que el “vivo vive del bobo”, pero lo que realmente hay detrás de esta frase, es que el deshonesto e ilegal se aprovecha del que se apega a la ley sin transgredirla, puesto que, al salirse del marco jurídico tiene más posibilidades de acción. Y ese “vivo” (llámese deshonesto), en lugar de ser sancionado socialmente es celebrado por su astucia, su inteligencia, la forma de evadir controles o leyes o normas. Duncan cita a Virginia Gutiérrez de Pineda: *“La deshonestidad era un valor social si tenía como propósito el bienestar de la familia y de la comunidad, y si una parte de las ganancias era destinada a obtener el perdón de las autoridades religiosas”* (Gutiérrez, (1963) citado en, Duncan, 2011, pág. 183).

Buena parte de la sociedad colombiana está hoy permeada por ese rasgo cultural que la mueve a hacer una valoración positiva de comportamientos ilegales. Quienes operan actividades por fuera del marco legal o moral no son sancionados socialmente. Siguen formando parte activa de sus círculos sociales y son numerosísimos los casos de aquellos para quienes, no solo su familia no sirve como barrera ante dicho comportamiento y hasta lo promueven con su involucramiento y permisividad, sino que, ni los líderes religiosos o el discurso religioso logran sacudir las conciencias que, simplemente, se convencen de que nada malo están haciendo. Y la sociedad y el círculo de amigos tampoco declaran algún tipo de rechazo, más bien, tratan de usufructuarse del dinero de ese “amigo”, conseguido de modo ilegal.

Sobre esta falta de sanción social y familiar, Gerard Martin nos revela datos interesantes sobre la vida del narcotraficante Pablo Escobar. Para empezar, todos los hechos indican que Escobar nunca recibió una sanción por parte de sus padres. Martin revela el testimonio de Alba Marina Escobar, hermana del jefe del llamado cartel de Medellín: *“Mi mamá era muy permisiva en todo lo relacionado con Pablo”* (Martin, 2012, pág. 66). Además, la madre de Escobar usó eufemismos para referirse a las actividades ilegales de su hijo. Cuando Escobar se retiró del colegio para dedicarse a la ilegalidad, lo que su madre dijo, fue: *“Pablo se retiró del colegio para ayudar a su familia”* (Martin, 2012,

pág. 66). Un poco más adelante Martin escribe que *“Alba Marina también cuenta con lujo de detalles como no solamente ella misma, sino también su mamá, otros hermanos, primos y tíos pronto apoyaron actividades ilegales, guardando dólares, insumos, haciendo balances de los negocios y recibiendo a título personal propiedades obtenidas de manera criminal”* (Martin, 2012, pág. 66).

Gerard Martin reconoce la importancia de la sanción social sobre aquellas personas que muestran, desde temprana edad, inclinación hacia actividades ilegales:

La única sanción impuesta a Pablo en su adolescencia parece haber surgido en el colegio. Hay evidencia de que fue suspendido varias veces por un par de días y que posiblemente fue expulsado. Sin embargo, nunca fue relegado por su colegio a algún servicio especial de reforma o resocialización, y tampoco es claro si tal servicio profesional existía en la ciudad. Pablo, Gustavo y Mario eran jóvenes en alto riesgo de incurrir en carreras criminales, pero ni sus familias, ni sus instituciones educativas, ni ninguna otra instancia, jamás adelantaron algún tipo de intervención preventiva o de rehabilitación institucional para con estos adolescentes. Aquella omisión terminó costando caro a la ciudad y al país (Martin, 2012, págs. 66-67).

Esto lleva el mensaje de que, efectivamente, lo ilegal es un “buen negocio” que, a pesar de los riesgos, vale la pena hacer, pues no solo *se consigue plata y nadie me rechaza por eso, es más: más amigos consigo*, sino que hay otra característica que se le suma: una de las necesidades humanas, según la pirámide de Maslow, es el reconocimiento social; y en un país clasista, con férreas y excluyentes jerarquizaciones sociales, el dinero rápido, fácil y abundante permite ese reconocimiento y, por ende, el ascenso social que toda persona busca.

En Antioquia, las clases excluidas se inventaron formas de sobrevivir, ante una sociedad que cerraba puertas y oportunidades para ellos. En este sentido, el tema moral era resuelto fácilmente, es como si pensarán algo así: *“Si el mundo moderno al que nos hemos visto arrojados no ofrece alivio a nuestras necesidades, nosotros nos las arreglaremos a nuestro modo, bajo nuestras propias leyes”* (Duncan, 2011, pág. 163). Un narcotraficante lo explica

mejor: *“Los colombianos pobres luchamos hasta la muerte para dejar de serlo; no esperamos las oportunidades de la vida sino que las buscamos, inclusive nos las inventamos, a las buenas o a las malas”* (Duncan, 2011, pág. 164).

¿Qué se vislumbra detrás de todo esto?: un importante sentimiento de exclusión social. Muchas personas pertenecientes a las clases más pobres, al ver una ciudad moderna que les excluía de sus actividades sociales y económicas, optaron por hacer “lo que fuera” con tal de sentir o conseguir algún tipo de reconocimiento social, con un agravante: en culturas como la antioqueña, desde el siglo XIX, se ha considerado que ese reconocimiento social lo da el dinero. *“Algunos de los colonizadores pobres tuvieron éxito económico y no tuvieron restricciones para ascender en la escala de prestigio de su comunidad. El éxito económico era suficiente para el reconocimiento social y se apoyaba la migración como una alternativa para quienes no encontraban oportunidades económicas en su lugar de origen”* (Duncan, 2011, pág. 179).

Estas palabras de Virginia Gutiérrez de Pineda (1963) citada en Duncan (2011), apoyan lo que asegura el investigador vallecaucano Luis H. Fajardo: *“El sistema de valores imperante en la sociedad antioqueña desde muy atrás era fijado por los grupos de comerciantes. En general, los calificativos morales que se aplicaban a las personas estaban íntimamente relacionados con su éxito en los negocios y la posesión de dinero era la mayor fuente de prestigio”* (Fajardo, 1966, pág. 51). Seguramente Fajardo se basó en el testimonio que nos dejó escrito el médico francés Charles Saffray, cuando, en su viaje a la Nueva Granada, hacia 1861, pasó por Medellín, y al conocer a sus habitantes, así los describió:

El término único de comparación es el dinero: un hombre se enriquece por la usura, los fraudes comerciales, la fabricación de moneda falsa u otros medios por el estilo, y se dice de él: ¡es muy ingenioso! Si debe su fortuna a las estafas o a las trampas en el juego, solo dicen: ¡sabe mucho! Pero si piden informes sobre una persona que nada tenga que echarse en cara sobre este punto, contéstase invariablemente: es buen sujeto, pero muy pobre. (Saffray, 1948, págs. 93-94).

Así que no es de extrañar que, en una sociedad con este tipo de valores, surgieran personas que, para encontrar la reivindicación que la sociedad les negaba, ya fuera por falta de educación o falta de oportunidades laborales,

quisieran “aprovechar” las oportunidades que el negocio del narcotráfico ofrecía, sin importar que fuera un asunto ilícito. Lo importante era, “a las buenas o a las malas”, conseguir dinero que permitiera ascender en la escala social para ser “alguien en la vida”, como se dice popularmente.

Dos citas del profesor Duncan esclarecen el tema: “*Un fuerte sentido de reivindicación ante un sentimiento de exclusión fue lo que delineó las actuaciones criminales de aquellos narcotraficantes que desde mediados de los setenta comenzaron a controlar la producción y el contrabando de cocaína en Colombia*” (Duncan, 2011, pág. 164).

“El caso de los sicarios de Medellín que se convirtieron en un ejército anónimo de Escobar en su guerra contra el Estado guardó todas las trazas de una rebelión desenfrenada de excluidos, sin ningún objetivo político claro pero con una decisión y unos efectos sociales implacables. Esos adolescentes de vecindarios miserables, profundamente resentidos por la exclusión material y simbólica a la que se había visto sometida su comunidad, no dudaban en ofrecerse para crímenes imposibles (...) Estaban dispuestos a cambiar una vida de restricciones y humillaciones por unos pocos años, meses e incluso días de gloria y opulencia” (Duncan, 2011, pág. 174).

Antes de terminar, una acotación importante. No siempre la falta de oportunidades o la miseria son causantes de que las personas incurran en actividades violentas o ilegales. Martin hace esta salvedad, al investigar sobre la vida familiar y la banda de Pablo Escobar, en donde se involucraron algunos de sus hermanos, primos y amigos. Sobre ellos, escribe:

Estos jóvenes no entraron en aquel mundo por falta de oportunidades. Mario y Gustavo incluso alcanzaron a cursar unos semestres en la universidad. Roberto realizó estudios técnicos [...] fue además un talentoso ciclista [...] Alba Marina, hermana tres años menor que Pablo, empezó estudios en la universidad, pero se retiró antes de graduarse para dedicarse a operaciones administrativas, logísticas y de blanqueo para la banda (Martin, 2012, págs. 68-69).

Sobre la posición económica de la familia Escobar Gaviria, Gerard Martin destaca:

Pablo y sus seis hermanos crecieron entonces en un ambiente de clase media baja, con una relativa estabilidad y calidad en su escolarización [...] Aunque se mudaron con frecuencia y vivieron en barrios distintos de la ciudad, nunca pasaron por necesidades de extrema pobreza o de marginalidad. Siempre contaron con una empleada, traída desde El Tablazo [...] Es decir, que en particular nunca experimentaron la misma situación marginal de cientos de miles de migrantes campesinos que llegaron por la misma época sin un peso a la ciudad, con padres analfabetas y sin profesión, en busca de seguridad, empleo y un mejor futuro para sus hijos (Martin, 2012, pág. 64).

¿Qué pasó entonces en la vida del narcotraficante Pablo Escobar que se volvió célebre por declararle la guerra al Estado colombiano y al que se le atribuyen “mil o más muertes directas”? (Martin, 2012, pág. 63) Es, quizá, el último elemento que se quiere destacar en este artículo: el tema de la ambición desmedida y sin límites del dinero, para poder acceder a todos los encantos que ofrece la sociedad consumista y que cada día arrastra a gentes de todas las clases. Estas son las palabras que Martin recoge de Escobar: *“Esos fueron para mí (apenas había salido del bachillerato) los ejemplos que determinaron el futuro de mi vida y de la de muchos, muchísimos muchachos que comenzábamos a vivir con ilusiones, pero ya sin muchas ganas de trabajar en una fábrica o en un almacén. Es lo que veíamos (...) era esa opulencia, sumada a la aventura y sumada al poder que da el dinero”* (Martin, 2012, pág. 79).

Conclusión

Los odios políticos por un lado, y por otro lado, la exclusión social que niega oportunidades de desarrollo humano, la difusión de actividades ilegales y la falta de sanción social hacia quienes las practican, son generadores de violencia. Intervenir sobre estos cuatro factores para desactivar la violencia que conllevan, está al alcance de todos; no es asunto solo del gobierno. Es asunto de todos los ciudadanos que pretenden construir un país con futuro viable. Siempre se cree que Colombia *no aguanta más*, y sin embargo, sigue aguantando; sigue, pero con estándares de percepción de calidad de vida cada vez más deteriorados. “¿Reventará” algún día Colombia?, o ¿ya “reventó”? ¿Qué más falta?

La violencia asesina y la agresividad cotidiana aumentan cada vez más. Pero si vemos, la intervención sobre los factores aquí señalados, puede ser algo tan sencillo como una opción personal. Es factible que, si cada uno decide intervenir en su espacio de vida familiar, social y laboral tratando de desactivar estos factores, se reduzcan tantos ambientes violentos en el país y la espiral ascendente en la que está sumida Colombia desde hace decenas de años, empiece a ceder en altura y en volumen.

Quizá, entonces, llegará un momento en que podríamos hablar en términos de tiempo pasado de la única característica perdurable que hasta el momento, todos los colombianos de esta generación, hemos conocido del país: la violencia.

Bibliografía

- Duncan, G. (2011).** *Crimen y poder: el filtro del orden social*. En: **Giraldo, J. 2001** *Economía criminal en Antioquia: narcotráfico* (págs. 151-248). Medellín: Eafit.
- Fajardo, L. (1966). *¿La moralidad protestante de los antioqueños?* Cali: Ediciones Departamento de Sociología de la Universidad del Valle.
- Guzmán, G., Fals, O., & Umaña, E. (2010). *La Violencia en Colombia* (Primera, 2010 ed., Vol. Tomo I). Bogotá: Punto de Lectura.
- Martin, G. (2012). *Medellín, tragedia y resurrección. Mafia, ciudad y Estado. 1975-2012*. Bogotá: Planeta.
- Palacios, M. (2012). *Violencia pública en Colombia, 1958-2010*. Bogotá: Fondo de Cultura Económica.
- Saffray, C. (1948). *Viaje a Nueva Granada*. Bogotá: Biblioteca Popular de Cultura Colombiana.